

La pandemia, el populismo y los nuevos retos de la sociedad civil

Alberto J. Olvera



Vivimos en México y en el mundo una inédita crisis sanitaria que ha acelerado una monumental crisis económica que ya estaba en ciernes. Hoy, cuatro meses después del inicio de la pandemia, sabemos que los gobiernos del mundo habían sido advertidos del inminente riesgo de una pandemia viral, sin que ninguno tomara medidas preventivas ante semejante amenaza. También sabemos que los brutales efectos económicos que el forzado confinamiento ha causado en el mundo obligan a repensar radicalmente tanto el modelo imperante de capitalismo neoliberal globalizado como el papel del Estado en la regulación de la economía y en la creación de mínimos de bienestar. La crisis sanitaria ha servido para demostrarle al mundo la intolerable precariedad de los sistemas de salud en todos los países, especialmente en América Latina, todo ello como consecuencia de la política de privatización de servicios públicos y la consecuente falta de inversión pública en los servicios esenciales. Vivimos un fin de época, que crea grandes incertidumbres, fortalece peligrosas tendencias autoritarias en buena parte del mundo, pero que también nos da la oportunidad de repensarnos y de volver a creer que otro mundo es posible.

La crisis obliga nos obliga a todos, y a las organizaciones de la sociedad civil especialmente, a repensar nuestro papel en el espacio público-político y a redefinir los objetivos y las estrategias a seguir en un contexto político-social que se ha modificado radicalmente. Las prioridades de la solidaridad ciudadana se concentran hoy y lo harán aún más en los próximos meses, y tal vez años, en el apoyo a las poblaciones vulnerables para que puedan acceder a los servicios médicos indispensables, garantizar la alimentación de millones de personas que se han quedado sin empleo y sin ingresos, tratar de impulsar políticas de protección a la salud y la seguridad personal de las mujeres y niños, expuestos por las circunstancias a un mayor grado de violencia intrafamiliar y, sobre todo, a proseguir una olvidada labor que en su origen muchas organizaciones civiles desarrollaron: el apoyo a la autoorganización popular, sea en el territorio urbano, en las fábricas, en los servicios, en las escuelas o en las comunidades campesinas.

Las organizaciones civiles se enfrentan al gigantesco reto de adaptarse a una circunstancia histórica completamente nueva. La crisis que vivimos es de una profundidad impredecible y con consecuencias en todos los ámbitos de la vida pública y privada. No puede pretenderse que muy pronto podremos volver a nuestras actividades de siempre y a la lógica de la acción que en el pasado tuvo algún sentido.

Si esto es cierto a nivel mundial, en México la situación es aun más compleja por causas internas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha roto con las inercias políticas generadas en los gobiernos de la transición a la democracia. El triunfo de la coalición política que construyó López Obrador fue arrollador en una elección plebiscitaria en la que la mayoría de la población decidió que estaba harta de un régimen semidemocrático profundamente corrompido, totalmente ajeno a la sociedad y dotado de un cinismo y de una frivolidad no vistas en décadas.

La profundidad de la crisis de legitimación del régimen de la transición explica que un político profesional de larga trayectoria haya ganado arrasadoramente las elecciones presidenciales, a pesar de la escasa claridad de su propuesta programática y de la profunda distancia que el propio López Obrador ha guardado siempre respecto a todos los actores de la sociedad civil. El ahora presidente ha considerado desde tiempo atrás que no sólo los actores políticos de la coalición neoliberal son responsables por el desastre, sino que también las élites culturales, mediáticas y civiles tienen una responsabilidad en los resultados del proceso de transición, al no haberse opuesto con la energía necesaria al régimen corrupto.

En el nuevo gobierno, todos los elementos del populismo están presentes: un líder carismático; un proyecto vago, pero que parece responder a las expectativas de cambio que desesperadamente demanda la sociedad; una promesa de retorno a un pasado mitificado en el que había orden y progreso (el desarrollo estabilizador) y una relación directa entre gobierno y pueblo; una legitimidad electoral incuestionable y un método de acción política que conecta directamente al líder con las masas: las giras constantes, las mañaneras, los videos de fin de semana y en general la ocupación casi monopólica del espacio público por parte del líder. Para completar el cuadro, se ha establecido un campo político marcado por la distinción amigo/enemigo. Típicamente se denuncia a las elites del pasado, la “mafia neoliberal”, etc., como el enemigo, y se incluye en esa categoría a cualquiera que quiera oponerse a los designios del líder. Los amigos son poco definidos; se trata ante todo del “pueblo bueno”, una masa inorgánica, y de quienes desde los partidos de la coalición gobernante apoyan sin chistar al presidente, como en las épocas pasadas, así como los defensores mediáticos, poco abundantes, pero necesarios para articular la política de descrédito a los “enemigos”.

Se está constituyendo en México un régimen populista, como muchos otros que hoy se han expandido por el mundo. El líder se considera a si mismo el portador de una misión histórica, con ribetes religiosos: una “cuarta transformación” que debe cambiar a México por el resto del siglo. La ambición no se articula con una capacidad de ejecución. Por el contrario, como en todos los regímenes populistas, el líder tiende a desinstitucionalizar al Estado al imponer sus decisiones sin debate previo, estudios necesarios y preparación adecuada. Las capacidades estatales, de suyo disminuidas en la fase neoliberal, están hoy brutalmente dañadas debido a una política de austeridad más afín al neoliberalismo radical que a la necesidad de una reconstrucción del Estado.

Las organizaciones de la sociedad civil en México enfrentan así un reto doble. De un lado, su agenda específica, centrada generalmente en la defensa de los derechos humanos y en la atención a sectores específicos de la población, se ve hoy rebasada por la urgencia de atender la emergencia humanitaria que se viene. De otro, la situación política creada por el proyecto populista impide actuar en articulación y acuerdo con el gobierno federal y obliga a pensar en una agenda de defensa de la democracia y de la propia existencia autónoma de la sociedad civil.

La polarización populista dificulta la más elemental de las tareas en una situación de emergencia como la que vivimos: la alianza entre niveles de gobierno y actores de la sociedad civil para garantizar ante todo la sobrevivencia digna de la población y la salida ordenada y rápida de la crisis económica. Asimismo, el cierre del espacio público a un debate racional y civilizado obstruye la búsqueda colectiva de alternativas viables a la crisis estructural. Es por ello que una primera tarea indispensable es insistir en el diálogo, en la evaluación de alternativas, en el aprendizaje colectivo a partir de experiencias exitosas ya disponibles y en el lanzamiento de iniciativas que congreguen a todos los actores políticos y sociales posibles. Este exhorto debe dirigirse no sólo al gobierno, sino también a los sectores cada más radicalizados de la derecha histórica, de sectores de las clases medias y de algunos grupos corporativos que hoy juegan también, irresponsablemente, el juego de la polarización, sin interés alguno en el bienestar colectivo.

Sin embargo, la experiencia reciente enseña que los exhortos al diálogo no son suficientes. Y ello vale para todo tipo de actores, tanto de la élite económica,

como de la sociedad civil histórica, como de los sectores populares. La coyuntura política actual coloca a las organizaciones de la sociedad civil en una condición parecida a la que tuvieron en los años 90, en su fase de formación y consolidación. En esos tiempos, las organizaciones de la sociedad civil debieron coaligarse para defenderse de los intentos de control político del gobierno federal y de los ataques de los gobiernos locales. Tuvieron que formar grandes alianzas para impulsar la lucha política central de la época, que fue la de democratizar la vida pública. El principal actor político-civil de esta fase, la Alianza Cívica, fue precisamente una articulación de redes de la sociedad civil en el impulso de una agenda democrática. Si bien en este momento la democracia electoral no está en riesgo, lo cierto es que la polarización política y la crisis económica pueden conducir a un proceso electoral en 2021 en el que haya episodios de violencia o donde puedan ponerse en duda los resultados, máxime que hay un esfuerzo explícito por parte del gobierno federal para debilitar al órgano electoral. Ciertamente, el INE está lejos de ser ejemplar, pero este no es el momento de corroer sus cimientos.

La experiencia también indica que las organizaciones de la sociedad civil carecen de una fuerza política propia y que dependen para avanzar en su agenda democrática de que haya movimientos sociales populares que impulsen sus propias agendas de derechos. La democratización de fines de los 90s no hubiera sido posible sin la aparición del EZLN y la formación de un gran movimiento de solidaridad con el zapatismo indígena. Fue ese movimiento lo que convenció al régimen autoritario de que era necesario darle canalización electoral al descontento social acumulado.

Quienes han tomado un lugar protagónico en el campo de los movimientos sociales en años recientes han sido el movimiento feminista y el movimiento estudiantil. Se trata de un nuevo tipo de movimientos sociales, articulados y autoconvocados por medio de las redes sociales, carentes de organización formal y de representación autorizada, que recurren a la movilización frecuente y en ocasiones a la acción directa. En realidad, son muchos grupos dispersos reunidos en coyunturas específicas. Tienen vasos comunicantes importantes, puesto que el movimiento feminista tiene su base en las universidades y libra una lucha al interior de ellas por detener y castigar el acoso sexual y las múltiples formas de expresión de la cultura patriarcal hegemónica. Diversos grupos estudiantiles buscan la democratización de las

universidades, se solidarizan con el movimiento feminista, y reclaman la incapacidad institucional para atender la demanda de educación universitaria.

En el campo popular destacan las múltiples luchas contra los megaproyectos, la minería a cielo abierto y en general contra la destrucción de la naturaleza. Muchas de estas luchas son protagonizadas por pueblos indígenas que defienden así su autonomía política y su modo de vida. Sin duda este tipo de movimientos sociales estarán en la línea del frente en los próximos años dada la obsesión del actual gobierno por megaproyectos faraónicos, casi todos a ser desarrollados precisamente en territorios indígenas.

La pandemia de COVID-19 ha creado ya y creará más frentes de movilización social. Los trabajadores de la salud han sido las principales víctimas del desorden institucional y de la falta de planeación y dirección en el sector salud. Esta problemática no es sólo una responsabilidad de gobiernos pasados, que sin duda la tienen, sino también del actual, que ha impulsado una muy fallida reforma del sector. Los trabajadores de la salud han iniciado un movimiento que seguramente continuará por largo tiempo debido a que el gobierno no será capaz de atender sus demandas, que esperamos incluyen también la democratización de sus sindicatos, hasta ahora controlados, en su mayoría, por líderes mafiosos. La reforma laboral a que ha obligado la firma del nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá va a forzar la relativa democratización de los sindicatos y una mayor transparencia en el registro de los mismos y de los contratos colectivos. Es de esperarse una gran movilización en el sector, que tratará de ser controlada o dirigida desde el propio gobierno para desplazar a las viejas mafias corporativas priístas. Hay aquí una ventana de oportunidad para una impulsar una democratización largamente pospuesta en el mundo sindical.

La crisis económica, que implica despidos y baja de salarios, seguramente creará condiciones favorables a la protesta obrera. En este campo la asesoría jurídica y organizacional es imprescindible para contribuir a la creación de un sindicalismo democrático. Esta es una tarea abandonada tanto por las formaciones históricas de la izquierda, hoy desaparecidas, como por las propias organizaciones civiles que alguna vez trabajaron en el sector. Asimismo, el avance imparable del capitalismo en el campo ha creado un verdadero proletariado agrícola que ya ha dado muestras diversas de capacidad de movilización y que tiene una urgencia de sindicalización para la

defensa de sus derechos. Es preciso considerar en este breve recuento a los nuevos trabajadores informales del sector público, los llamados “Servidores de la Nación”, quienes realizan el trabajo de terreno para la aplicación de los programas sociales del gobierno. Esos trabajadores están sometidos a un régimen laboral extraordinario que los deja sin derechos y los obliga a laborar en condiciones difíciles.

Esta es una enunciación rápida de los múltiples frentes de conflicto social que ya estaban abiertos antes de la pandemia y que ahora pueden experimentar una escalada de movilizaciones.

El gobierno de López Obrador, en la medida que ha prescindido de todo tipo de mediación social e incluso de la formación de un verdadero partido político del régimen, se encuentra seriamente incapacitado para lidiar con los conflictos sociales que se salgan de su lógica amigo/enemigo. La penosa reacción del presidente frente la movilización feminista del 8 de marzo pasado es un ejemplo de la profunda incomprensión del mandatario de la urgencia y validez de las demandas de los nuevos movimientos sociales. Existe un riesgo cierto de que múltiples movilizaciones sociales, incluidas muchas generadas por la desesperación y el hambre, sean catalogadas por el régimen, en el contexto de la polarización, como “atentados golpistas”.

Es en ese contexto que las organizaciones civiles, tanto las históricas como las formadas por nuevas generaciones de activistas, tendrán que asumir un papel público más cercano a la resistencia democrática que a la mera gestión de la incidencia. Muchas de las organizaciones civiles profesionales que se han formado en la última década, algunas de las cuales han tomado la forma de *Think Tanks*, carecen de la experiencia y de la formación para dar una lucha en el terreno político-civil. Pero en una época en la cual el debate racional está virtualmente cerrado y en el que el gobierno se niega a escuchar, es necesario pensar en nuevas formas de acción colectiva acordes con los retos del presente.

La pandemia sólo ha hecho más urgente la tarea que ya tenían planteada las organizaciones civiles antes de la emergencia: contribuir a la democratización de la propia sociedad civil, defender las instituciones democráticas que tanto trabajo ha costado construir y mantener la lucha por los derechos humanos en todo su alcance. El gran reto de esta nueva fase histórica será lograr la

articulación entre los movimientos sociales de nuevo tipo, las protestas populares y las organizaciones de la sociedad civil en una lucha que debe conducir a una sociedad más justa y democrática.